



## RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

#### SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, doce (12) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: APELACIÓN AUTO QUE NO DECLARÓ NULIDAD – PROCESO DE SINDICAL  
DEMANDANTE: POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID  
DEMANDADO: JUAN CARLOS JARAMILLO  
RADICADO: 050013105 007 2019 000612  
Acta No: 16

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA** se constituyó en audiencia pública en el proceso de Especial de Fuero Sindical promovido por el **POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID** en contra de **JUAN CARLOS JARAMILLO**, para decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandado contra el auto mediante el cual el Juzgado Séptimo Laboral de este circuito negó declarar la nulidad.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 16** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

#### 1. ANTECEDENTES DEL AUTO RECURRIDO

##### 1.1. LA SOLICITUD DE NULIDAD Y LA DECISIÓN DEL A QUO

Con este proceso se busca que se autorice a la parte actora a retirar del cargo al señor Juan Carlos Jaramillo, argumentando que se encuentra incurso en la causal de retiro del servicio establecida en el artículo 2.2.11.1.1 numeral 7 del Decreto 1085 de 2015<sup>1</sup>.

En audiencia pública del **22 de septiembre de 2020**<sup>2</sup> el apoderado del demandado señaló que el proceso adolece de las siguientes irregularidades que, en su criterio, pueden

---

<sup>1</sup> Folio 2 a 5

generar nulidades y por ello deben sanearse: **i)** No se ha notificado la existencia del proceso a la Procuraduría General de la Nación, lo que debe realizarse en razón a la calidad de las partes. **ii)** Que se debe realizar la notificación del auto admisorio para proceder a contestar la demanda. Y se debe revocar el auto por medio del cual se dio por contestada la demanda, porque tal actuación debe agotarse en la audiencia, de conformidad con el artículo 114 del CPL y S.S.

La Juez de instancia no accedió a las peticiones solicitadas por el apoderado en la audiencia, señalando lo siguiente: **i)** No es necesaria la vinculación de la Procuraduría General de la Nación porque el POLITÉCNICO actúa como **demandante** y no como demandado, por ello no se encuentra en riesgo la defensa del orden público ni el patrimonio público. **ii)** El trámite de notificación se adelantó correctamente, la curadora *ad litem* contestó la demanda y la misma se admitió. Si bien el artículo 114 del CPL Y S.S. permite que la parte conteste en audiencia, nada impide que se radique antes de la diligencia como ocurrió en el presente asunto.

## 1.2. EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL APODERADO DEL DEMANDADO.

Estando en la oportunidad procesal para ello, el apoderado judicial del demandado interpuso el recurso de apelación en contra de las decisiones anteriores manifestando: **i)** La notificación a la Procuraduría es necesaria y serán los procuradores quienes manifiesten si participan o no en el trámite. El patrimonio se puede ver altamente afectado si se llegare a despedir a mi representado, pues se entablarán las demandas con las consecuencias que puede acarrear económicamente a la entidad por eventuales condenas. Así, señala que debe declararse la **nulidad** a partir del **auto admisorio de la demanda**: 25 septiembre de 2019; **ii)** Con relación a la notificación personal del demandado: si bien se agotaron todos los trámites de notificación como el aviso y el emplazamiento, cuando el demandado presenta memorial el **21 de septiembre de 2020** dándose por notificado, este trámite debe prevalecer sobre las demás y por ello desde allí se tiene la facultad de presentar la contestación, además de conformidad con el artículo 114 CPL y S.S. la misma se puede presentar hoy.

## 2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

---

<sup>2</sup> Folio 136 a 140

De acuerdo con los ANTECEDENTES de esta providencia, se advierte que son dos los problemas jurídicos a resolver en esta instancia: El **primero** de ellos consiste en definir si, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, en este caso proceso se debe informar de la existencia de este proceso al Ministerio Público. En caso afirmativo, cual es la oportunidad procesal para efectuar dicho trámite. En **segundo** término, se analizará si, el hecho de que se hubiese radicado contestación de la demanda por la curadora *ad litem* antes de la audiencia pública consagrada en el artículo 114 del CPL, impide que el apoderado judicial nombrado por el demandado pueda contestar la demanda en la audiencia pública definida por la Ley para tal efecto.

Para efectuar el análisis de los problemas jurídicos que hoy ocupan la atención de la Sala, debe tenerse en cuenta que, el **artículo 29** de la Constitución Política, garantiza a los ciudadanos el respeto de las formalidades procesales, la aplicación efectiva de la norma positiva y como consecuencia de ello, la correcta administración de la justicia.

Dicho postulado constitucional persigue, fundamentalmente, que las personas estén protegidas contra eventuales abusos y desviaciones de las autoridades judiciales, dado que, cada trámite está sujeto a lo que la norma constitucional define como las “*formas propias de cada juicio*”.

En ese orden de ideas, el procedimiento se constituye en la forma mediante la cual los individuos interactúan con el Estado, al someter sus diferencias, y por ello mismo se requiere de su estricto cumplimiento, con el objeto de no desquiciar el ordenamiento jurídico.

Pues bien, en este caso concreto, se debe partir de la premisa que estamos en un proceso especial de fuero sindical, cuyo trámite se regula en los artículos 112 al 116 del Código Procesal del Trabajo, y en relación con el procedimiento se dispone en el artículo 114 lo siguiente:

**ARTICULO 114. TRASLADO Y AUDIENCIAS.** <Artículo modificado por el artículo 45 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Recibida la demanda, el juez en providencia que se notificará personalmente y que dictará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, ordenará correr traslado y citará a las partes para audiencia.

Dentro de esta, que tendrá lugar dentro del quinto (5o.) día hábil siguiente a la notificación, el demandado **contestará la demanda** y propondrá **las excepciones que considere tener a su favor**. Acto seguido y en la misma audiencia se decidirá las excepciones previas y se adelantará **el saneamiento del proceso** y la **fijación del litigio**.

A continuación, y también en la misma audiencia se **decretarán y practicarán** las pruebas y se pronunciará el correspondiente **fallo**. Si no fuere posible dictarlo inmediatamente, se citará para una nueva audiencia que tendrá lugar dentro de los dos (2) días siguientes. (negrilla intencional)

Se observa entonces, que una vez trabada la Litis, se ha concentrado la realización de diferentes etapas procesales en una misma audiencia, desde la contestación de la demanda, resolución de excepciones previas, saneamiento del proceso, fijación del litigio, decreto y práctica de pruebas, hasta la sentencia.

## **2.1. SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS PROCESOS LABORALES**

El **numeral 7º del artículo 277** de la Constitución Política<sup>3</sup> autoriza al Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus Delegados y Agentes, intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales y administrativas, norma que se desarrolla en el **artículo 16** del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social<sup>4</sup>.

Es claro que el Ministerio Público por intermedio de sus Procuradores Judiciales en lo Laboral, están plenamente facultados para intervenir en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción del trabajo, por lo que podrán, sin restricción de ninguna naturaleza, ejercer sus actividades para la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del **interés público** y la vigilancia de la conducta oficial, por así autorizarlo la Constitución Política.

Sobre el particular se ha pronunciado de tiempo atrás la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias de casación del 7 de octubre de 2008 y 23 de septiembre de 2009, radicados internos números 32641 y 36132-, criterios que conservan total vigencia, acogidos en las sentencias **SL3753-2020 y SL2501-2018**

“Para la Sala, es claro que el Ministerio Público por intermedio de sus procuradores judiciales en lo laboral, están plenamente facultados para ‘intervenir’ en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción del trabajo, como expresamente lo indica el artículo 16 del C. P. L.; por lo que podrán, sin restricción de ninguna naturaleza, ejercer sus actividades para la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del **interés público** y la **vigilancia de la conducta oficial**, por así autorizarlo la Constitución Política, (art. 118) y para la defensa del **orden jurídico**, del **patrimonio público**, o de los derechos y garantías

---

<sup>3</sup> **Numeral 7 del artículo 277 de la C.N.:** “El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones (...)”

**“(...) 7.** Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales. (...)”

<sup>4</sup> **Artículo 16 del CPL y S.S.** “El Ministerio Público podrá intervenir en los procesos laborales de conformidad con lo señalado en la ley”.

fundamentales, (numeral 7 del art. 277 de la C.P., art. 56 del Decreto 2651 de 1991, art. 10 de la Ley 25 de 1894, art. 48 del Decreto 262 de 2000).

“Obviamente, esta intervención del Ministerio Público en los procesos laborales, no puede enmarcarse dentro de los esquemas fijados a las partes, por cuanto la Constitución Política la garantiza (artículo 277 numeral 7), ‘cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales’. Lo que quiere decir que, frente a alguno de estos bienes jurídicos, protegidos por el Constituyente, en el evento que el procurador o sus delegados considere necesaria su intervención, lo podrá hacer, ya sea **formulando alegatos, interponiendo acciones o incidentes, proponiendo excepciones, solicitando pruebas y participando en su práctica, o rindiendo conceptos e informes que requiera su defensa, (...).**

“En estas condiciones, no son de recibo los argumentos del censor, al pretender que se limite exclusivamente la intervención del Ministerio Público a ‘evitar que se haga (sic) fraudes y se pretende obtener un derecho indebido en el proceso’, como se indica en el recurso, o ‘únicamente como vigilante de los procesos’, según la transcripción del salvamento de voto, pues la Constitución Política y la Ley, al desarrollar sus funciones, las garantizan en forma amplia y sin restricción.

“De otro lado, no surge que el Tribunal hubiera interpretado erróneamente el Art. 10 Ley 25 de 1974, pues sólo se limitó a transcribir el texto del artículo, resaltando en negrillas que ‘Corresponde a los procuradores regionales actuar ante los juzgados laborales’, sin haberle dado alguna valoración diferente a la que corresponde a su tenor literal. Idéntico comentario debe hacerse con relación a los artículos 16 del C. de P. L. y S. S. y 48 del Decreto 262 de 2000”. – (negrilla intencional)

Así, disiente la Sala de la apreciación de la Juez de instancia para no acceder a efectuar el saneamiento solicitado por el apoderado del demandado en la audiencia, pues la intervención del Ministerio Público por intermedio de sus Procuradores Judiciales no sujeta en manera alguna a la posición procesal de las partes, siendo relevante la protección del **interés público** y la **vigilancia de la conducta oficial** así como del **patrimonio público**, lo que resulta relevante en este proceso especial de FUERO SINDICAL en el que se solicita por una entidad de naturaleza pública – POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID- se autorice retirar del servicio a un servidor público. La intervención del Procurador Social no solo se agota contestando la demanda o proponiendo excepciones, pues en defensa del orden jurídico está facultado para formular alegatos, interponer incidentes, solicitar pruebas y participar en su práctica, interponer recursos, etc.

Ahora bien, el recurrente afirma que lo procedente es declarar la nulidad a partir del auto admisorio de la demanda, pero a ello no se accederá, porque de acuerdo con lo previsto en el artículo 114 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (modificado por el artículo 45 de la Ley 712 de 2001), es justamente la audiencia pública en la que el apoderado expresa la irregularidad procesal la oportunidad para adelantar **el saneamiento del proceso**, de manera que, ante la omisión que se advierte, lo procedente

es ordenar a la Juez de instancia informar al Procurador Judicial sobre la existencia de este Proceso Especial de fuero sindical indicándole la fecha y hora en que habrá de celebrarse la audiencia pública, con el fin de que decida, sin intervendrá o no en el trámite.

## **2.2. SOBRE LA OPORTUNIDAD PROCESAL PARA CONTESTAR LA DEMANDA**

La Juez de instancia argumenta que el trámite de notificación se adelantó correctamente, la curadora *ad litem* contestó la demanda y la misma se admitió, y si bien el artículo 114 del CPL Y S.S. permite que la parte conteste en audiencia, nada impide que se radique antes de la diligencia como ocurrió en el presente asunto. Y el apoderado del demandado plantea en su recurso que, si bien se agotaron todos los trámites de notificación, a partir del memorial del **21 de septiembre de 2020** el demandado se dio por notificado, este trámite debe prevalecer sobre las demás y por ello, se cuenta con la facultad de presentar la contestación en la audiencia pública.

Para resolver la controversia, la Sala encuentra en la actuación realizada hasta ahora en este proceso, lo siguiente:

- Por auto del **25 de septiembre de 2019** se admitió la demanda, se impartió el trámite Especial de Fuero Sindical, se ordenó notificar el auto admisorio al demandado y al representante legal de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid "ASINSERPOL" y se fijó fecha para llevar a cabo audiencia<sup>5</sup> para el 11 de octubre de 2019 a las 8 y 30 a.m.
- La parte actora realizó los trámites de notificación personal<sup>6</sup>, pero ante la infructuosa tarea solicitó el emplazamiento, a lo que accedió se por el Despacho<sup>7</sup>. Se nombró como curadora *ad litem* del señor JUAN CARLOS JARAMILLO y de "ASINSERPOL" a la abogada LUISA FERNANDA GRISALES FLOREZ<sup>8</sup>, quien procedió a radicar un memorial que contiene la CONTESTACION DE LA DEMANDA mediante correo electrónico del **11 de septiembre de 2020**, por fuera de audiencia<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> Folio 71

<sup>6</sup> Folio 72 a 105

<sup>7</sup> Folio 106

<sup>8</sup> Folio 117 - 120

<sup>9</sup> Folio 121 a 124

- En la misma fecha, se libró un auto con el que se decidió dar por contestada por la demanda y reconocer personería a la doctora GRISALES FLOREZ para representar a JUAN CARLOS JARAMILLO y de "ASINSERPOL" <sup>10</sup>.
- Con correo electrónico del **21 septiembre de 2020**, se allegaron al proceso, poder otorgado por el señor JUAN CARLOS JARMILLO al abogado CARLOS ANDRÉS GALEANO MARULANDA y memorial del apoderado, solicitando reconocerle personería, notificarle personalmente la demanda trasladándole copia del expediente a un correo electrónico, relevar del cargo a la abogada LUISA FERNANDA GRISALES únicamente respecto al señor JARAMILLO y reprogramar la audiencia pública fijada para el 22 de septiembre<sup>11</sup>. Con auto de la misma fecha se reconoció personería al abogado, se denegó la solicitud de notificación argumentando que el señor **JUAN CARLOS JARAMILLO** se encontraba representado en el proceso por curadora *ad litem* quien había contestado la demanda, la que incluso, había sido admitida<sup>12</sup>.

Pues bien, revisada la actuación, debe la Sala señalar que, si bien la curadora *ad litem* que fue designada por el Despacho para representar los intereses del señor JUAN CARLOS JARMILLO y de "ASINSERPOL" radicó una contestación de demanda con correo electrónico del 11 de septiembre de 2020, lo cierto es que, tal como se ha definido a lo largo de esta providencia, en este Proceso Especial de Fuero Sindical, la audiencia pública consagrada en el artículo 114 del CPL y S.S **es la oportunidad procesal para contestar la demanda**, y tratándose de una **norma de orden público, se impone su acatamiento**, máxime que es ésta la oportunidad procesal para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la demanda, proponer excepciones y solicitar pruebas. Del mismo modo, es en la audiencia pública la oportunidad para **poner traslado la contestación a la entidad DEMANDANTE**. Es claro entonces, que no se encuentra ajustada a derecho la decisión de tener por contestada la demanda de JUAN CARLOS JARAMILLO y de "ASINSERPOL" con la providencia proferida por fuera de audiencia el **11 de septiembre de 2020**.

Siendo, así las cosas, si no se hubiese constituido apoderado judicial para representar los intereses de JUAN CARLOS JARAMILLO y de "ASINSERPOL", lo procedente era incorporar en la audiencia pública la contestación radicada por la curadora *ad litem*, poniéndola en traslado del POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID y resolver sobre la

---

<sup>10</sup> Folio 127 y 128

<sup>11</sup> Folio 129 a 132

<sup>12</sup> Folio 133 a 134



eventual reforma a la demanda. Pero, al haberse otorgado poder al doctor CARLOS ANDRES GALEANO MARULANDA, a quien ya se le reconoció personería para representar a estas dos personas, desplazando de este modo a la curadora *ad litem*, no queda duda que es la audiencia pública la oportunidad para contestar la demanda respecto de cada uno de ellos, en garantía del debido proceso, el derecho de defensa y el respeto de las formas procesales.

Finalmente, analizando las actuaciones efectuadas por el señor JUAN CARLOS JARAMILLO en el trámite de notificación del auto admisorio, así como de su actual apoderado quién compareció al proceso un día antes de la audiencia pública solicitando el aplazamiento, habiéndosele otorgado poder desde el 25 de agosto de 2020<sup>13</sup>, se les conmina al cumplimiento de los deberes de las partes y sus apoderados, en los términos del **artículo 78 del Código General del Proceso**, referidos entre otros, a proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos, obrar sin temeridad en el ejercicio de sus derechos procesales, abstenerse de obstaculizar el desarrollo de las audiencias y diligencias, y prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias.

Es el conjunto de CONSIDERACIONES precedente, el que impone REVOCAR las decisiones de primera instancia. Y al salir avante el recurso de apelación, no habrá condena en costas en esta instancia.

#### **4. DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE:**

**PRIMERO: REVOCAR** la decisión de DAR POR CONTESTADA LA DEMANDA de JUAN CARLOS JARAMILLO y de "ASINSERPOL" adoptada en la providencia del **11 de septiembre de 2020**, de acuerdo con el análisis efectuado en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** Informar al Ministerio Público sobre la existencia de este proceso, y en el mismo, la fecha y hora en que se realizará la audiencia pública del **artículo 114 del CPL y S.S.**, oportunidad en la que se efectuará la CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA por JUAN CARLOS JARAMILLO y "ASINSERPOL", y se continuará con las demás etapas definidas en la Ley.

---

<sup>13</sup> Folio 129 - 130

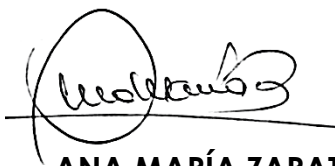


**TERCERO:** Conminar al señor JUAN CARLOS JARAMILLO, demandado en el proceso y representante legal de "ASINSERPOL", así como a su apoderado, el abogado CARLOS ANDRES GALEANO MARULANDA, al cumplimiento de los deberes consagrados en el **artículo 78 del Código General del Proceso**, referidos entre otros, a proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos, obrar sin temeridad en el ejercicio de sus derechos procesales, abstenerse de obstaculizar el desarrollo de las audiencias y diligencias, y prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias.

**CUARTO:** Sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notifica por ESTADOS. Se da por terminada la audiencia y se firma en constancia por los que en ella intervinieron.

**Los Magistrados,**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE  
MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 45  
del 15 de marzo de 2021

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>